

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, mayo once (11) de dos mil veintitrés (2023).

AUTO

Para llevar la representación de la parte accionada Colpensiones, se le reconoce personería a la doctora Carmen Yojana Ramírez Villegas portadora de la TP número 157.953 del CSJ.

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001310501320160148701 promovido por **MARTHA LUCÍA ARNAS GUIRALES**, contra **COLPENSIONES**, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín así como el estudio del grado jurisdiccional de Consulta a favor de Colpensiones.

De conformidad con el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto

Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **113**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, la señora Martha Lucía Arenas Guirales solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente con ocasión del fallecimiento de su cónyuge el señor Jorge León Galeano López, bajo el principio de la condición más beneficiosa, desde el 29 de junio del año 2003, así como los intereses del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y la indexación.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, invocó que el 29 de julio de 2003 falleció su cónyuge, quien cotizó un total de 491.71 semanas de las cuales 464 fueron con antelación al 1 de abril de 1994 fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, argumenta que el 10 de diciembre del año 1997 contrajo matrimonio católico con el señor Galeano López conviviendo por un total de 5 años y 7 meses. Comentó que el afiliado era quien suplía todas las necesidades económicas del hogar, con lo cual, solicita la aplicación de la condición más beneficiosa.

Admitida la demanda mediante auto veintisiete (27) de abril del año dos mil diecisiete (2017), se citó en calidad de terceros excluyentes a los jóvenes Jorge Iván Galeano Arenas y Diego Mauricio Arenas Güirales, quienes comparecieron a recibir notificación personal en el juzgado, pero no elevaron pretensión alguna conforme al artículo 63 del CGP.

Colpensiones, dio respuesta a la demanda indicando que, es cierta la muerte del afiliado, y la solitud elevada ante la entidad, pero que no le constan los demás hechos narrados. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las

excepciones que denominó: “Inexistencia de la obligación, por ausencia de uno de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de la pensión de sobreviviente”. “Petición de lo no debido”, “Improcedencia de los intereses moratorios”, “Prescripción”, “Imposibilidad de condena en costas”, “Compensación indexada”, “Excepción innominada”, “Descuento del retroactivo por salud”.

En sentencia del cuatro (4) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, declaró que la demandante es beneficiaria de la pensión de sobreviviente causada por la muerte de su cónyuge en aplicación de la condición más beneficiosa y conforme sentencia SU 005 de 2018, con un retroactivo pensional en cuantía de \$49.077.736 desde el 15 de junio del año 2013 al 31 de agosto de 2018 y desde el 1 de septiembre del año 2018 en adelante en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente. Autorizó a favor de Colpensiones los descuentos en salud y condeno al pago de la indexación de las mesadas pensiones. Declaró probada de manera parcial la excepción de prescripción de las mesadas causadas con antelación al 15 de junio del año 2015 y condenó en cosas a Colpensiones. Absolvió de las demás pretensiones invocadas.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte accionada Colpensiones, interpuso recurso de alzada indicando que, la norma para el estudio de la prestación exige el cumplimiento de 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores al fallecimiento, artículo 46 de la ley 100 de 1993 y revisada la densidad de semanas se concluye que no tiene el número de semanas necesarias para ello. Sobre la aplicación de la condición más beneficiosa citó la sentencia 38374 de 25 de julio de 2002, indicando que no es procedente la aplicación de la condición más beneficiosa en cumplimiento del acuerdo 049 de 1990, sino de la ley 100 de 1993 primigenia y no de manera ultractiva. Consideró que la posición asumida por el despacho no es correcta, pues de acuerdo a las normas probatorias, recaía sobre la parte demandante probar los supuestos de lo pretendido. Se aparta de la valoración de la prueba, pues indicó

que la juzgadora dio por probado el grado de vulnerabilidad de la demandante señalando que es una persona desplazada por condición de la violencia, pero no obra en el proceso certificación de la calidad de desplazada por órgano competente para ello, como la Fiscalía General de la Nación o de la Personería Municipal de Itagüí. Llamo la atención que dentro del interrogatorio de parte y en la declaración del señor Jorge Iván Galeano hijo de la accionante, cuando se refiere a las circunstancias relativas a la condición de desplazamiento lo hace de manera ligera, superficial, no se detiene a ahondar las circunstancias de desplazamiento, lo que no quedó claro. También se asumió la condición de vulnerabilidad por una condición física o enfermedad de ambas manos, pero esa es la manifestación de la declarante sin que haya historia clínica que lo respalde. Narró que se hizo alusión que por las condiciones de miseria en la que está la demandante por la muerte de su cónyuge tuvo que vender la propiedad que tenía, pero la prueba de eso no se ve en el proceso, no se allega certificado de libertad ni ningún documento. Dijo que es cuestionable que 13 años después la demandante presenta la solicitud de reconocimiento pensional, lo que hace parte del test sin su cumplimiento. Indicó que es precaria la convivencia porque se dice que el finado estaba privado de la libertad, pero la prueba de ello no reposa en el plenario, no existen otras pruebas que fortalezcan los dichos de la declarante. Finalmente, indicó que se encuentra en desacuerdo con las costas del proceso, pues debió sopesarse la naturaleza del mismo, pues la decisión que se toma, es sopesando un lineamiento de la Corte Constitucional. Finalmente dejó claro que es una sanción injusta frente a Colpensiones pues la demandante se demoró 13 años para realizar la solicitud pensional.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Colpensiones, reiteró su oposición a la sentencia de primera instancia, y expresó que en reciente pronunciamiento contenido en la sentencia SL1938 del 10 de junio de 2020, el Tribunal de Cierre de la especialidad laboral, unificó y reiteró la doctrina que de manera pacífica ha representado su línea decisoria frente al principio de la condición más beneficiosa, y enfatizó en que si el régimen de transición es temporal no tiene razón de ser para que la condición más beneficiosa anquilósale la

normatividad laboral. Particularmente, en este fallo esgrimió las razones jurídicas que le permiten apartarse del precedente decantado por la Corte Constitucional, para lo cual, explicó que son diferentes los efectos vinculantes que se derivan de un pronunciamiento en el que se realiza el control abstracto de constitucionalidad frente al que resulta de sentencias proferidas en sede de tutela, pues este último, permite “al juez apartarse de sus postulados siempre que se cumpla con el deber de transparencia y argumentación suficiente”, toda vez que sus efectos son inter partes, y en razón de ello, considera que ha cumplido en toda su línea decisoria con la carga argumentativa suficiente para discrepar del test de procedencia propuesto en la sentencia SU 05-2018, por cuanto y en tanto, se crean reglas diferentes a las consagradas por la Ley y, además, afecta la eficacia de la reforma legal y desconoce el principio de aplicación de la leyes en el tiempo así como el de seguridad jurídica. Aunado a lo anterior, destacó que las reformas legales se justifican en variables demográficas, fiscales y actuariales, por lo que desdibujar el genuino alcance de la norma que para un determinado momento histórico otorga mayor peso o importancia a la permanencia en el aporte que al número de semanas cotizadas, puede conllevar a la desestabilización y desequilibrio financiero del sistema.

Reiteró que el finado no dejó cumplidos los requisitos para que, sus beneficiarios pudieran acceder a la pensión de sobreviviente, por tanto, la revocatoria de la primera instancia.

PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo al recurso interpuesto, consiste en determinar si es procedente el reconocimiento pensional a la señora Martha Lucía Arenas Guirales en aplicación al principio constitucional de la condición más beneficiosa.

CONSIDERACIONES

El previo agotamiento establecido en el artículo 6 del CPT y SS, se encuentra acreditado con la resolución GNR 232261 de 8 de agosto del año 2016.

De acuerdo la fecha del fallecimiento del señor Jorge León Galeano López el 29 de julio del año 2003, el estudio para la causación de la pensión de sobreviviente debe darse, conforme a la norma que se encontrare vigente para dicho momento, que no era otra que el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que a su letra indica:

“Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:

PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que, a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.”

Revisada la historia laboral allegada en el plenario, se constata que el señor Jorge León Galeano López realizó su última cotización efectiva al sistema general de pensiones bajo el empleador Claudia Restrepo para el periodo agosto de 1996, presentando desde esa fecha una ausencia de cotizaciones. En atención a ello la a quo dio estudio a la prestación en aplicación a la condición más beneficiosa, como fue solicitado en el libelo genitor.

En consideración a que las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 no consagró un régimen de transición frente a la pensión de sobrevivientes, la Corte Constitucional ha adoctrinado que el principio de favorabilidad consagrado en los artículos 53 Superior y 21 del Código Sustantivo del trabajo, “obedece a uno de los dispositivos que la Carta Política establece para la resolución de conflictos surgidos con ocasión de la interpretación o aplicación de las normas que regulan relaciones del trabajo”; y opera, no sólo cuando se presenta un conflicto entre normas sino también cuando existe una norma que admite varias interpretaciones (Sentencias T-792 de 2010 y T-350 de 2012 y T-084 de 2017).

La Corporación mencionada ha señalado en diversas oportunidades que cuando se analiza sobre la procedencia de la pensión de sobrevivientes se puede examinar el reconocimiento de esta prestación a la luz de una norma jurídica anterior a la vigente en el momento de causarse el derecho, aplicando el principio de la condición más beneficiosa como una expresión del principio de favorabilidad; y que para tal reconocimiento es necesario demostrar que el afiliado cumplió el número de cotizaciones exigidas por dicha norma jurídica, y que los aportes se efectuaron durante su vigencia (Sentencia SU 442 de 18 de agosto de 2016).

El alto Tribunal ha justificado así la aplicación del principio de favorabilidad:

“En efecto, la Corte Constitucional determinó... que en virtud de la inexistencia de un régimen de transición y de los principios de buena fe, confianza legítima y favorabilidad, es posible dar aplicación a una norma anterior... si el afiliado realizó sus cotizaciones en vigencia de la mencionada norma jurídica, cuando una norma posterior resulte desfavorable a su derecho a acceder a la pensión.

Para la Corte Constitucional resulta claro que esta regla tiene como finalidad proteger el principio de favorabilidad que en materia laboral ha reconocido el constituyente primario en el artículo 53 de la Constitución Política. A su vez, el mismo garantiza la protección de la expectativa legítima de aquellos ciudadanos que, observando el régimen pensional vigente para la fecha de su afiliación al sistema de seguridad social, efectuaron sus cotizaciones con

el objetivo de obtener su pensión, o el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a sus familiares. Asimismo, es de importancia resaltar que el acceso a la pensión de sobreviviente resulta necesario para la protección del derecho fundamental al mínimo vital, especialmente en aquellos casos en que se evidencia una dependencia económica del cónyuge o compañero permanente supérstite, con el afiliado fallecido. De esta manera, la aplicación del principio de favorabilidad en materia pensional, y en especial, de la condición más beneficiosa, se encuentra directamente ligado a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y a la garantía de una vida en condiciones dignas.” (Sentencia T-464 de 2016)

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado ampliamente dicho precepto, en sentencias como SL 41671 del 14 de agosto de 2012; SL 10556 de 2015, radicación N° 44459 del 11 de agosto de 2015; SL 17134 de 2015, radicación N° 54383 del 11 de noviembre de 2015 y en la muy importante providencia SL 4650 de 2017, donde fijó una nueva doctrina sobre la aplicación del tránsito legislativo definiendo los supuestos a verificar para el reconocimiento de la prestación y los parámetros para ello, dando la posibilidad de una aplicación ultractiva de la norma.

Determino por ende que para aplicar el principio de la condición más beneficiosa, en el tránsito legislativo existente entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993 así como el determinado entre la Ley 100 de 1993 a la Ley 797 de 2003, es imperioso que el causante hubiese cotizado las semanas mínimas para la causación de la pensión de sobrevivientes, en vigencia de la norma cuya aplicación ultractiva se pretende, porque solo desde ésta perspectiva, es posible cobijar las expectativas pensionales. Sin embargo, en la sentencia de la que se ha hecho referencia, para la condición más beneficiosa entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, **se exigieron 300 semanas cotizadas antes del 1 de abril de 1994.**

Pero, para el tránsito legislativo imperante entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, depende de la condición de cotizante activo del afiliado al momento de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, así:

Primer escenario: que el afiliado se encontraba cotizando al momento del cambio normativo en cuyo caso se deberá llenar los siguientes requisitos: a) Que al 29 de enero de 2003 el afiliado estuviese cotizando. b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 29 de enero de 2003. c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. d) Que al momento del fallecimiento estuviese cotizando, y e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes del deceso.

Segundo escenario: del afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo deberá llenar los siguientes requisitos: a) Que al 29 de enero de 2003 el afiliado no estuviese cotizando. b) Que hubiese aportado 26 semanas en el año que antecede a dicha data, es decir, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002 c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. d) Que al momento del deceso no estuviese cotizando, y e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el año que antecede al fallecimiento.

Valga la pena indicar, que estos presupuestos tampoco son cumplidos por el señor Respecto al señor Jorge León Galeano López si bien no se encontraba cotizando para el momento del cambio normativo, no se cumplen la totalidad de requisitos dados en el segundo escenario, sin embargo, si cuenta con 300 semanas cotizadas a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

La H. Corte Constitucional en la sentencia SU 005 del 13 de febrero de 2018, y en su calidad de máximo órgano de interpretación normativa a la luz de la Constitución, explicó que se se aparta de la regla dispuesta por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en relación con el principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes, ello, **solo cuando quien pretende acceder a esta prestación económica es una persona vulnerable**, por considerar que resulta desproporcionada y contraria a los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas.

Como fundamento de ello, explicó que la aplicación de tipo ultractiva de las disposiciones dadas en el Acuerdo 049 de 1990 ó de regímenes anteriores, en lo relativo al requisito de semanas de cotización, con la finalidad del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de un afiliado, cuya muerte se dio en vigencia de la Ley 797 de 2003, se limita a aquellos beneficiarios que pretendan acceder a la prestación económica de sobrevivientes y **ostenten la calidad de personas vulnerables, bajo el sentir que son personas de especial protección del estado.**

Puntualizó su posición así:

“No obstante, para la Corte Constitucional, la regla dispuesta por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sí resulta desproporcionada y contraria a los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas, cuando quien pretende acceder a la pensión de sobrevivientes es una persona vulnerable. En estos casos, los fines que persigue el Acto Legislativo 01 de 2005 -hacer viable el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en condiciones de universalidad y de igualdad para todos los cotizantes- tienen un menor peso en comparación con la muy severa afectación de los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas de las personas vulnerables. Por tanto, solo respecto de estas personas resulta proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa en el sentido de aplicar, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 □ o regímenes anteriores- en cuanto al primer requisito, semanas de cotización, para efectos de valorar el otorgamiento de dicha prestación económica, aunque el segundo requisito, la condición de la muerte del afiliado hubiese acaecido en vigencia de la Ley 797 de 2003. Si bien estas personas vulnerables no adquirieron el derecho a la pensión de sobrevivientes en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, los aportes del afiliado, bajo dicho régimen, dieron lugar a una expectativa que, por las circunstancias particulares del tutelante, amerita protección constitucional.”

Fue necesario entonces, el dicha providencia, explicar quienes se consideran personas vulnerables, para lo cual se construyó un test de procedibilidad. Con este, se lograba determinar quienes debían ser consideradas personas vulnerables para

el reconocimiento de la pensión sobrevivientes, así: **1)** Que el accionante pertenezca a un grupo de especial protección constitucional o se encuentre en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; **2)** Que la falta de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del demandante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas. **3)** Que el beneficiario dependía económicamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al beneficiario. **4)** Que el causante se encontraba en circunstancias que le imposibilitaban cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes. **5)** Que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la prestación económica.

Sea lo primero indicar que, en este caso, el finado afiliado cotizó un total de 464 semanas cotizadas previo a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, con lo cual, es procedente el estudio del test de procedencia.

Se allegó al plenario la siguiente prueba documental de importancia para dirimir el litigio:

- Registro civil de matrimonio celebrado entre Jorge León Galeano López y la demandante, rito católico acontecido el 10 de diciembre de 1997.
- Declaración extra juicio de la demandante realizada ante el Circulo de Itagui Notaría primera, el día 14 de abril del año 2016 donde expresa que convivió con el finado afiliado con quien contrajo nupcias, siempre dependió económicamente de él, y procrearon tres hijos de nombre Diego Mauricio Galeano Arenas, Jorge Iván Galeano Arenas y Luz Aida Galeano Arenas.
- Declaración extra juicio del señor Luis Abel Jaramillo Martínez en el Circulo de Itagui, Notaría Segundo, expresando que conoce a la demandante, su

relación con el señor Jorge Galeano Arenas, con quien estuvo casada bajo el rito católico, procrearon tres hijos y nunca se separaron.

En audiencia del artículo 80 del CPT y SS, se recepcionó prueba testimonial de la cual se resalta lo siguiente:

Jorge Iván Galeano Arenas: Hijo de la demandante y de su finado cónyuge. Expuso que sus padres siempre estuvieron juntos porque pese a estar en la cárcel las visitas eran constantes. Cuando salió de la cárcel empezó a trabajar en los tejares, y destinaba el dinero a mercar, no pagaban arriendo porque había una casa de tapias y madera. La obligación del hogar la llevaba él, para el momento del deceso vivían solo sus padres. La demandante dependía económicamente de su cónyuge. No sabe por qué se demoró la mamá en hacer la solicitud pensional, la demandante sabe leer y escribir. La señora Martha Lucía Arenas sabe leer y escribir. Vendieron la casa que tenían para supir los gastos del hogar.

Diyan Shirley Ruiz Espinal: Vive en Frontino, Conoce a la demandante porque eran vecinas hace muchos años en Itaguí. Pese a que el afiliado estuvo en la cárcel la relación nunca terminó. Jorge murió cuando vivían en Itaguí, y la obligación económica la llevaba el señor Jorge trabajando haciendo tejas de barro. Vive con la demandante porque la señora Martha es desplazada de la violencia y recibe ayudas económicas del estado. No sabe la razón por la cual la demandante se demoró tanto en solicitar la pensión.

El interrogatorio de parte realizado a la demandante arrojó a las luces del artículo 191 del CGP los siguientes puntos de confesión, es decir, en aquellas situaciones adversas a sus intereses:

- ❖ Se separó del finado afiliado desde el 4 de agosto del año 1987 hasta el 3 de enero del año 2001 toda vez que estuvo recluso en un centro carcelario.
- ❖ Las cotizaciones del año 1996 son consecuencia de la labor que desempeñaba el afiliado cuando se le daban permisos.

- ❖ Recibe dineros por ayudas humanitarias consecuente al desplazamiento forzado del Municipio de Itagüi.
- ❖ Empezó a hacer trámites desde el año 2010, se metió en internet con alguien que le ayudó y concluyó que, no se tenían las semanas suficientes para el reconocimiento de la pensión.

Previo a la verificación del Artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modifica el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, deberá de terminarse, si conforme a la prueba recaudada se cumple el Test de procedencia determinado en la sentencia en comento:

TEST DE PROCEDENCIA		CUMPLIMIENTO
Primera condición	Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.	<p>De la prueba testimonial se resalta que en efecto la señora Arenas Guirales se encuentra en una situación de pobreza extrema, en donde depende de su hijo para solventar los recursos en procura de su propia subsistencia.</p> <p>No puede dejar de lado la Sala que fue objeto de confesión por parte de la demandante que recibe ayudas humanitarias como consecuencia del desplazamiento forzado del cual fue víctima en vereda del Municipio de Itagüí, sumado a que se encuentra inscrita como cabeza de familia en el sistema de Salud Subsidiado conforme a documental aportada en la audiencia del Artículo 77 del CPT y SS.</p> <p>Conforme a ello, se cumple la primera condición.</p>
Segunda condición	Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital	De los testimonios se constata que, la demandante se encuentra bajo el amparo de su hijo, quien no tiene un ingreso fijo, pues vive del comercio informal vendiendo “solteritas” en la salida de un colegio de Frontino, con

	y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.	lo cual, el grupo de familiar recibe ese único aporte. Las necesidades básicas de la demandante se encuentran precariamente cobijadas, pues el sustento recibido es poco para cubrir los gastos del hogar y viven en condiciones difíciles en una casa alquilada en el Municipio de Frontino. Se cumple la Segunda Condición.
Tercera condición	Debe establecerse que el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al - beneficiario.	Se explicó con los testimonios arrimados, a su egreso del centro carcelario el señor Jorge León Galeano López en su oficio de elaboración de tejas, era quien “llevaba la obligación” del hogar que compartía con la señora Martha Lucía Arenas, quien para el momento de la muerte de éste no laboraba. Sí se cumple la Tercera Condición.
Cuarta condición	Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes.	El fallecimiento del señor Galeano López se dio el 29 de julio del año 2003, su egreso de la cárcel fue en el año 2001, pudiéndose desempeñar en la labor de elaboración de tejas para su sustento, “rebuscando” los trabajos. Es coherente que estando tan cercana la fecha en que salió del centro carcelario, no hubiere tenido la oportunidad de ingresar de manera formal a laborar y efectuar las cotizaciones necesarias para dejar causado el derecho. Se Cumple la Cuarta Condición.
Quinta condición	Debe establecerse que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.	Pese a que el fallecimiento del afiliado el 29 de julio del año 2003, la demandante se limitó a reclamar la prestación para el 15/06/2016, de acuerdo a solicitud extraída del expediente digital y radicada bajo el número 2015_6549637.

		No se cumple la Quinta Condición.
--	--	-----------------------------------

Sobre esta última condición impartida por la Corte Constitucional, debe decirse que es imperativo entender que hay casos en los cuales existen hay razones válidas, para que, se hubiere imposibilitado el acceso del peticionante a elevar la prestación que mediante acción judicial pretende.

Para ello, debe decirse que, un término “razonable” que debe mediar entre la fecha de ocurrencia de la presunta afectación de los derechos fundamentales, es decir, la muerte y su cuestionamiento en sede judicial, no es una posición pacífica en la jurisprudencia y se circunscribe a la puntualidad de los entornos de cada presunto beneficiario y las condiciones especiales que esté pasando.

En sentencia T-060/16, se indicó:

“Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acción, la Corte ha establecido los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.” (Subraya fuera de texto)

Por consiguiente, debe estudiarse en cada caso particular, atendiendo los criterios antes reseñados, si la acción de tutela, pudiéndose ejercer, se presentó dentro de un término razonablemente oportuno. Así, en algunos casos, seis (6) meses podrán resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; así como también, en otros, un término de 2 años se podría

considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependería de las particularidades del caso.”

30. Con todo, la Corte ha precisado que, bajo ciertos parámetros, es aceptable un mayor espacio de tiempo transcurrido entre el hecho que genera la vulneración y la presentación de la acción de tutela. En este sentido, en sentencia T-158 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) expuso:

“De la jurisprudencia de esta Corporación se puede derivar que solamente es aceptable un extenso espacio de tiempo transcurrido entre el hecho que genera la vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias específicas: (i) Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual. Y (ii) que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”.

En el caso de la demandante, es claro que, fue víctima del desplazamiento forzado después de la muerte de su cónyuge y al encontrarse en estado precario, elevó solicitud de protección ante autoridad competente, por lo cual fue inmersa en el sistema de ayudas para la población desplazada de allí, recibe ayuda más o menos dos veces al año, es una mujer capaz, que sabe leer y escribir, incluso confesó haberse hecho presente ante Colpensiones a solicitar información verbal sobre el reconocimiento pensional en el año 2010, donde se le explicó que no tenía derecho, y pese a indicar que no cuenta mayores estudios, del interrogatorio de parte se constató ser una persona coherente, consciente, que entendía la densidad de semanas que le explicó en su momento la empleada de Colpensiones.

Vale la pena recalcar que desde la sentencia T-584 de 2011, se avizoró la posibilidad del reconocimiento de la pensión de sobreviviente bajo el presupuesto de la

condición más beneficiosa en un tránsito normativo ultractivo, para lo cual, la señora Martha Lucía Arenas Guirales pudo comparecer judicialmente desde ese momento en aras del reconocimiento de su derecho, incluso, del testimonio del señor Jorge Iván Galeano Arenas se dejó claro su reproche ante la demandante por la desidia en la reclamación en tiempo oportuno.

No está de más recordar que el tránsito normativo ultractivo activado por la Corte Constitucional con la sentencia SU 05 de 2018 bajo el esquema del test de procedencia, tiene como fondo la necesidad de amparar a un grupo poblacional que, en razón a sus condiciones propias de vulnerabilidad, activó en tiempo los medios necesarios para ser protegido.

Esta Sala de Decisión no puede excusar los motivos de la ausencia de reclamación de la demandante en tiempo oportuno, pues por el contrario si se denota que ante la situación precaria en la que se encontraba activó los mecanismos necesarios para ser beneficiaria como grupo poblacional en estado de indefensión, pudiendo para ese momento también, activar el aparato judicial solicitando la prestación que solo ahora pretende, y ante el cumplimiento de la totalidad de las condiciones del test de procedencia de deviene la negativa de lo pretendido, tal y como sucedió en el expediente T-6.029.414 resuelto en la sentencia de unificación estudiada, en donde el paso del tiempo determinado como inactividad de parte concluyó en la negativa del test de procedencia.

Colorario a lo expuesto, se Revocará la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Revocar en su totalidad la sentencia proferida el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Sin Costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Código de verificación: **e2b03fa27cab770809961f7c8e370730b2edb467e4d20e695b96afd8116cfc9**

Documento generado en 11/05/2023 03:10:04 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>